



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de junio de dos mil veinte (2021)

DEMANDANTE	PORFIRIO DE JESÚS CORTÉS HERNÁNDEZ
DEMANDADA	COLPENSIONES y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
ORIGEN	Juzgado Veintiuno Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05 001 31 05 021 – 2016-00567
TEMAS	Pensión de invalidez, principio de condición más beneficiosa, intereses moratorios del art.141 de la Ley 100 de 1993
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por PORFIRIO DE JESÚS CORTÉS HERNÁNDEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA -JRCI-.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Porfirio de Jesús Cortés Hernández formula demanda contra Colpensiones y la JRCI, pretendiendo se declare **i)** que ambas incurrieron en error en la determinación de la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral -PCL-, siendo anterior a la definida por ellas; **ii)** se dé valor al dictamen elaborado por médico adscrito a la IPS Universitaria donde se determinó que el 11 de diciembre de 2000 se estructuró la PCL; **iii)** Se ordene a Colpensiones, en aplicación del principio de condición más beneficiosa, en concordancia con el principio de favorabilidad, reconocerle y pagarle pensión de invalidez desde la referida fecha; **iv)** Se ordene el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales están corriendo desde la

1 Fls.1/4

causación de la prestación; **v)** Se ordene a la JRCl el pago de indemnización de perjuicios (daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y de vida en relación); y **vi)** costas procesales a cargo de ambas demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 08 de diciembre de 1952; cotizó 331.41 semanas ante el Sistema General de Pensiones, entre el 18 de julio de 1978 y el 24 de diciembre de diciembre de 1992. Fue diagnosticado con diabetes mellitus insulino-requiere, retinopatía diabética, obesidad grado I, hiperparatiroidismo secundario, vejiga neurogénica, disfunción eréctil, insuficiencia renal (es trasplantado), linfoma no hodking (tratamiento con quimioterapia), hipotiroidismo, pancreatitis crónica y osteoporosis. Como consecuencia del primer diagnóstico, el 11 de diciembre de 2000 fue diagnosticado con retinopatía diabética.

Colpensiones calificó su PCL el 10 de diciembre de 2014, en dictamen N° 20148203211, en que concluyó que presenta una pérdida del 45.23%, de origen común, estructurada el 18 de noviembre de 2014. En virtud de recurso de apelación la JRCl emitió el dictamen N° 54972, notificado el 19 de agosto de 2015 determinando que la pérdida es del 64.61%, estructurada el 17 de mayo de 2010, cuando se le practicó el trasplante renal, dejando de lado las restantes patologías padecidas por el afiliado. El 14 de septiembre de 2015 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, siendo negada mediante resolución GNR 410817 del 17 de diciembre de 2015, por no cumplir con los requisitos exigidos para ello.

El 04 de abril de 2016 solicitó a la IPS Universitaria de Antioquia, que calificara su PCL, emitiéndose dictamen que tuvo como principal diagnóstico la diabetes mellitus insulino-dependiente con complicaciones oftálmicas, arrojando una pérdida del 66.64%, estructurada el 11 de diciembre de 2000; por ello, solicitó nuevamente el reconocimiento de pensión de invalidez, el 12 de abril de 2016, sin obtener respuesta.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Ambas integrantes de la pasiva se opusieron oportunamente a las pretensiones de la demanda, así:

i. Colpensiones²

El demandante no satisface los requisitos exigidos por los arts.38 y 39 de la Ley 100 de 1993, este último, modificado por el art. 1 de la Ley 860 de 2003. Excepcionó inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez al actor, petición de lo no debido, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de la condena, prescripción, compensación indexada e imposibilidad de condena en costas.

ii. Junta de calificación de invalidez de Antioquia³

² Fls.121/125

³ Fls.143/145

El dictamen emitido por esta entidad, se ciñó estrictamente al Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados por la parte demandante. Excepcionó inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

Sentencia de primera instancia⁴

El 06 de octubre de 2017, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, absolviendo a Colpensiones de todas las pretensiones y declarando probada la excepción de no cumplimiento del requisito mínimo de semanas para acceder a la pensión de invalidez. Condenó en costas al demandante, fijando agencias en derecho la suma de \$100.000 para cada una de las demandadas.

Fundó su decisión en que, si bien el demandante presenta una PCL superior al 50%, con independencia del dictamen que se estime para determinar la fecha de estructuración de la referida CPL, no satisface el requisito de semanas exigido por la Ley 860 de 2003. Niega tener conocimientos en materia de salud para determinar cuál de los tres dictámenes debe acoger, pero en cualquier caso, no se causó la prestación pretendida, por ausencia del requisito de semanas exigido en dicha norma, ni en el art.39 de la Ley 100 de 1993 primigenio o el art. 6 del Decreto 758 de 1990 de aplicarse el principio de condición más beneficiosa pretendido, porque pese a reunir más de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de justicia, en sentencia de radicación 45262 del 25 de enero de 2017, fijó una regla no satisfecha por el demandante, según la cual, el señor Cortés Hernández debió estructurar su PCL máximo hasta 6 años después del inicio de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Respecto de la pretensión de pago de perjuicios, no encontró acreditado ninguno, ni éstos se especificaron en la demanda.

Apelación de la parte demandante

El juez no debió aplicar la referida sentencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, si no a la SU-442 de 2016, a fin de reconocer la pensión de invalidez deprecada en la demanda. En cuanto a los perjuicios pretendidos, dijo: *“creo que es en relación a que el señor Porfirio no pudo recibir su pensión desde el momento en que configuro efectivamente su fecha de estructuración y qué hizo su reclamación, el señor como se ha dado cuenta con la historia clínica ha presentado detrimento en su salud y ha dejado de recibir su mesada pensional, todo por cuenta de un dictamen de pronto mal elaborado”*.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, fue descorrido por el demandante y por Colpensiones, así:

⁴ FI.187

La **parte demandante** reiteró la solicitud de revocatoria de la sentencia, pues cotizó 331.43 semanas con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que debe reconocerse la pensión de invalidez, en aplicación del principio de condición más beneficiosa, en atención lo exigido por el Decreto 758 de 1990, con independencia de la fecha de estructuración que se tome, respecto de su pérdida de capacidad laboral. Solicita que, se considerarse pertinente, se cite al médico de la IPS Universitaria para sustentar el dictamen aportado con la demanda y que se de aplicación a lo dispuesto en las sentencias SU 442 de 2016 y SU 556 de 2019, de la H. Corte Constitucional.

De otro lado, **Colpensiones** indicó que el juez laboral, es el llamado a dirimir el conflicto respecto del dictamen de la JRCl, pero, en la medida en que la parte demandante no acreditó su derecho, ni desvirtuó los dictámenes emitidos por Colpensiones y la JRCl, no contando con una PCL superior al 50%, debe confirmarse la sentencia apelada.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la fecha de estructuración de la PCL del demandante; **b)** si hay lugar a aplicar el principio de condición más beneficiosa a fin de ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. De ser así, se definirán **c)** las condiciones de causación y disfrute de la prestación; **d)** la procedencia del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional; **e)** si la JRCl adeuda la indemnización de perjuicios pretendida con la demanda.

Se fija en estos términos y no en torno a la definición del porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante, pues contrario a lo que expone Colpensiones al recorrer el traslado para alegar, hay dos dictámenes glosados al expediente, que establecen una PCL superior al 50% del accionante, y precisamente en apelación del emitido por Colpensiones se pronunció la Junta Regional de Calificación de Invalidez, evidenciándose del sustento de la demanda y de la contestación por parte de Colpensiones (fls. 122), que el debate se circunscribe a establecer la fecha de estructuración de la invalidez del actor, y demás aspectos propuestos en el acápite de problema jurídico a resolver por esta sala.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

* Porfirio de Jesús Cortes Hernández nació el 08 de diciembre de 1952⁵.

⁵ No se aportó registro civil de nacimiento, pero la información que suministra la copia de la cédula de ciudadanía del demandante, obrante a fl.12 del expediente, no es discutida por la demandada.

* Historia clínica que data desde el 17 de octubre de 1997 hasta el 09 de marzo de 2006⁶, desde 12 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016⁷, del 25 de febrero de 2016⁸ y del 19 de mayo de 2017⁹.

* El 8 de junio de 2015 fue expedido concepto médico endocrinólogo desfavorable de recuperación¹⁰, confirmado por neuropsicología clínica.

* Concepto médico de nefrología del 29 de febrero de 2016¹¹.

* Mediante comunicación recibida el 6 de febrero de 2015, se notificó por Colpensiones el dictamen de PCL N°201482032II, emitido por esa entidad el 10 de diciembre de 2014. Concluyó que presenta una pérdida del 45.23%, de origen común, estructurada el 18 de noviembre de 2014¹².

* El 19 de agosto de 2015 se le notificó personalmente del dictamen N°54972 del 23 de julio del mismo año, emitido por la JRCL, determinando una PCL del 64.61%, de origen común, estructurada el 17 de mayo de 2010¹³.

* El 23 de diciembre de 2015, le fue notificada la resolución GNR 410817 del 17 de diciembre de 2015, negándole la pensión de invalidez¹⁴. El 12 de abril de 2016 solicitó su revocatoria¹⁵.

* Según historias laborales expedidas por Colpensiones, actualizadas al 27 de diciembre de 2015 y el 23 de junio de 2016, cotizó 331.43 semanas al Sistema Pensional, entre el 18 de julio de 1978 y el 24 de diciembre de 1992¹⁶.

* El 04 de abril de 2016 fue calificado por la IPS Universitaria en dictamen N° 3214620, que determinó una PCL del 66.64%, de origen común, estructurada el 11 de diciembre de 2000¹⁷.

* El 24 de mayo de 2016 se le notificó resolución GNR 139291 del 11 de mayo de 2016, de Colpensiones negando nuevamente el reconocimiento de una pensión de invalidez¹⁸.

a) Fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del demandante

Sea lo primero anotar que el precedente judicial en la materia es diáfano al establecer que los dictámenes periciales emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez si bien constituyen prueba idónea de la pérdida de capacidad laboral, no son prueba irrefutable

⁶ Fls.13/57.

⁷ Fls.64/74.

⁸ Fls.77/78

⁹ Fls.182/184

¹⁰ Fls.58/59,60.

¹¹ Fls.75/76.

¹² Fls.83/86

¹³ Fls.87/91

¹⁴ Fls.93/96

¹⁵ Fls.97/100

¹⁶ Fls.102/103, 137/138.

¹⁷ Fls.104/108

¹⁸ Fls.132/135

de la misma, pudiendo ser debatidos en el escenario judicial, en el cual el principio de libre formación del convencimiento permite al Juez, acudir a otros medios probatorios para decidir de fondo sobre la pérdida de capacidad del demandante, en cada asunto concreto¹⁹.

La normatividad vigente al momento de calificarse la pérdida de capacidad laboral del señor Cortés Hernández, está contenida en el art.52 de la Ley 962 de 2005, modificadora del art. 41 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 917 de 1999 Manual Único para la Calificación de Invalidez.

La determinación del estado de invalidez está reglada por El art.41 y ss., de la Ley 100 de 1993²⁰, así como por el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación, que expide el Gobierno Nacional²¹.

Al tenor del art. 4 del Decreto 917 de 1999, para considerar que el dictamen es válido como prueba de la pérdida de capacidad laboral del paciente, los calificadores se orientarán por los requisitos y procedimientos establecidos en esta norma, a saber:

a) Consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron; y el DIAGNOSTICO CLINICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica, la historia ocupacional y con las ayudas de diagnóstico requeridas de acuerdo con la especificidad del problema.

b) Establecido el diagnóstico clínico, se procede a determinar la PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL del individuo, mediante los procedimientos definidos en el presente manual. En todo caso, esta determinación debe ser realizada por las administradoras con personal idóneo científica, técnica y éticamente, con su

¹⁹ Ver entre muchas otras, las SL 29622 de 2006, SL 27528 de 2007, SL 35450 de 2012, SL 44653 de 2013, SL16374 de 2015 y SL5280-2018, de las cuales hace mención la SL 1044 de 2019, que retoma el tema y sostiene la postura de vieja data.

²⁰Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de *invalidez* y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de *invalidez* y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de *Invalidez* del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de *Invalidez*, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

(...)

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de *invalidez* y determinar su origen.

A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales.

²¹ (...) *La calificación se realizará con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contener los criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad e invalidez que hayan generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.*

respectivo reconocimiento académico oficial. En caso de requerir conceptos, exámenes o pruebas adicionales, deberán realizarse y registrarse en los términos establecidos en el presente manual.

c) Definida la pérdida de la capacidad laboral, se procede a la CALIFICACION INTEGRAL DE LA INVALIDEZ, la cual se registra en el dictamen, en los formularios e instructivos que para ese efecto expida el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben registrar por lo menos: el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral causado por el accidente o la enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la fundamentación con base en el diagnóstico y demás informes adicionales, tales como el reporte del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.

d) El dictamen debe contener los mecanismos para que los interesados puedan ejercer los recursos legales establecidos en las normas vigentes, con el objeto de garantizar una controversia objetiva de su contenido en caso de desacuerdo, tanto en lo substancial como en lo procedimental²².

Son tres los dictámenes allegados al expediente, a través de los cuales se determinó tanto, la naturaleza de las patologías padecidas por el demandante, que ocasionaron la pérdida de su capacidad laboral, como su porcentaje y fecha de estructuración. Entre ellos debe decidirse a cuál atender, con miras a establecer la viabilidad de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, deprecado en la demanda, así:

i. Dictamen N°201482032II, emitido por Colpensiones el 10 de diciembre de 2014²³.

Describe: “Se trata de un paciente con antecedente de DM medicado con hipoglicemiantes orales solo por un año, después requirió insulinoterapia desde hace 26 años.”

08/10/2008: paciente diabético con complicaciones micro y macro vasculares secundarias.

Paciente con retinopatía diabética 19/04/2014: A V CC: OD: 20/100 y 05:20/40 Nefropatía diabética 17/05/2010 hicieron trasplante renal, desde esa fecha no requiere hemodiálisis, trasplante exitoso.

Antecedente adicional de HTA medicado con IECA

Antecedente adicional de hipotiroidismo medicado con L VT

Antecedente adicional de osteoporosis generalizada

02/08/2014: neurología: paciente con quejas subjetivas de deterioro cognitivo, se ordenan pnp, rnm cerebro

24/08/2014: RNM cráneo: leuco encefalopatía microangiopática incipiente.

18/11/2014: pruebas neuropsicológicas: se diagnostica un deterioro cognitivo leve de múltiples dominios secundario a patologías de base del paciente” (subraya la Sala)

A raíz de lo anterior, sin que se presente un desarrollo superior respecto de la historia clínica arribada por el paciente o la valoración física practicada al paciente, concluyó en

²² Art.4 Decreto 917 de 1999

²³ Fls.83/86

que presenta una pérdida del 45.23%, de origen común, estructurada el 18 de noviembre de 2014, coincidente con las pruebas neuropsicológicas que le diagnosticaron un deterioro cognitivo leve de múltiples dominios, secundario a sus patologías de base.

ii. Dictamen N°54972, emitido por la JRCI el 23 de julio de 2015²⁴.

Relaciona como diagnósticos calificados:

1. *Diabetes mellitus con complicaciones múltiples. El 16*
2. *Falla renal tratada con trasplante. N188*
3. *Retinopatía diabética (AV20/100, 20/60). H360*
4. *Hipertensión arterial I10X*
5. *Hipotiroidismo. E039*
6. *Osteoporosis secundaria. M814”.*

Determinó una PCL del 64.61%, de origen común, estructurada el 17 de mayo de 2010, coincidente con la fecha en que se practicó el trasplante renal. En la valoración, se lee: **“Paciente con diagnóstico de DM desde el año 1987, insulina requirente desde poco después del diagnóstico; HTA desde 1991, controlada con medicamentos; hipotiroidismo desde 1991; diabetes complicada con enfermedad renal crónica el año 2009 requirió trasplante en el año 2010, retinopatía diabética, osteoporosis en el año 2012, vejiga neurogénica en el año 2013, disfunción eréctil y sospecha de diabetes insípida”**. Señala que el trasplante renal *“corrigió parcialmente su estado de falla renal producto de complicación de la patología de base diabetes mellitus, por lo tanto desde esa fecha se superó la falla renal pero no se ha modificado el cuadro de diabetes complicada que se califica y la cual se han añadido otros padecimientos”* y expresa adicionalmente que para la fecha en que se practica el trasplante de riñón, *“ya existía como se dijo antes, cuadro de diabetes complicada que permite la máxima calificación de esa enfermedad y explica el estado de invalidez evaluado”*.

iii. Dictamen N° 3214620, emitido por IPS Universitaria el 04 de abril de 2016²⁵.

Relaciona como diagnóstico principal: Diabetes mellitus insulín dependiente con complicaciones oftálmicas. Como diagnósticos relacionados: Hipotiroidismo no especificado, osteoporosis sin fractura patológica otros linfoma de células T y los no especificados (linfoma no hodking, pancreatitis).

Refiere conocimiento de los anteriores dictámenes y la historia clínica del paciente. Determinó una PCL del 66.64%, de origen común, **estructurada el 11 de diciembre de 2000**, coincidente con el reporte de historia clínica de insulín dependencia y compromiso de retina.

Sustenta las conclusiones que el señor Cortés Hernández, presenta **“DEFICIENCIAS LINFOMA NO HODKING 40%. DIABETES INSULINODEPENDIENTE CON RETINOPATIA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 30% TABLA 9.7 14.9% TABLA 5.9 SI BIEN LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DIFIERE DE LA PERDIDA EMITIDA POR LA JUNTA REGIONAL**

²⁴ Fls.87/91

²⁵ Fls.104/108

DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA YA QUE EL PACIENTE EN LA ACTUALIDAD PRESENTA OTRAS PATOLOGIAS. ES EVIDENTE EN LA HISTORIA CLINICA APORTADA POR EL PACIENTE QUE DESDE EL 11/12/2000 (HISTORIA CLINICA DEL PUNTO DE ATENCION COMFAMA DE MANRRIQUE) REPORTA QUE SU DIABETES INSULINODEPENDIENTE YA PRESENTABA COMPROMISO DE LA RETINA LO CUAL SEGUN DECRETO 917/99 LE GENERABA UNA GRAN DEFICIENCIA LO QUE POR SI SOLO ERA SUFICIENTE PARA OTORGAR UNA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 50% POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE ACOGE DICHA FECHA COMO FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ”.

Considerando los hechos de la demanda que delimitaron el debate probatorio, la oposición de las demandadas y, no teniendo otros elementos de convicción distintos a los cuales acudir, apreciando además que el juez de instancia no atendió a ninguno de ellos, por considerarse ignorante en la materia, la Sala, además de hacer un respetuoso llamado de atención al A-quo, quien tiene el deber de decidir los temas puestos a su consideración, estando facultado legalmente para ello, opta por determinar como fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral del demandante, la referida en el segundo de los dictámenes glosados al expediente, es decir, el emitido por la JRCI, por las siguientes razones:

1. Se descarta el emitido por Colpensiones, en atención a su falta de argumentación. Más allá de relacionar los diagnósticos padecidos por el hoy demandante y señalar como fecha de estructuración la del diagnóstico de deterioro cognitivo leve de múltiples dominios, secundario a sus patologías de base, no explica las razones por las cuales con los padecimientos que anteceden a éste, no se estructuraba la pérdida de capacidad laboral del señor Cortés Hernández.

2. Se descarta el dictamen emitido por IPS Universitaria, dado que el fundamento para precisar el 11 de diciembre de 2000 como fecha de estructuración de la PCL se hace reposar en el hecho de haber iniciado desde entonces el compromiso de la retina, pero deja de lado que, según la historia clínica que tuvieron al alcance las tres entidades emisoras de los diagnósticos, la retinopatía diabética que desarrolló progresivamente en el transcurso del tiempo el hoy demandante, si bien ya tenía diagnóstico médico y remisión urgente a oftalmólogo desde el año 1996 debido a opacidad que dificultaba ver el fondo de su ojo derecho y no se visualizaba la pupila del ojo izquierdo (fl. 13), y presentaba hipertensión arterial (130/80) y sobrepeso, en los controles que anualmente se le hacían, en momento alguno evidenciaba dificultades de salud diferentes de su diabetes insulino dependiente, ni se evidenció que para esa época estuviera comprometida la capacidad laboral del paciente, no se le emitieron incapacidades, y se ignora si efectivamente fue atendido por oftalmólogo.

El documento a que refiere el dictamen, historia clínica del 11 de diciembre de 2000, obedece a una consulta prioritaria a la que asistió el paciente, manifestando *no ver casi nada*²⁶. El documento está incompleto y no señala el origen de la descripción del

²⁶ Fl.24

diagnóstico de retinopatía diabética, como tampoco, si fue remitido a médico especialista, si fue incapacitado, ni los exámenes o tratamiento recibido, distinto de una intervención laser seis meses antes de la consulta con el médico general, se desconoce cuán afectada estaba la capacidad para laborar, no pudiendo ser tenido este escueto documento, como la base para determinar la fecha estructuración de la PCL del demandante, al no estar acompañado de exámenes, o de concepto de oftalmólogo.

La sola mención de un diagnóstico de médico general sobre la retinopatía diabética no da lugar a calificar como lo hizo el galeno de la UDEA refiriendo en términos generales a que el manual de calificación de invalidez permite atribuirle un puntaje superior a 50%, siendo que existen varios niveles de clasificación a los cuales se atribuye diversos rangos de porcentaje de deficiencia global según las sintomatologías que presente el paciente, e incluso refiere a la calificación que se desprende de acuerdo al resultado de exámenes especializados para determinar el grado de pérdida de agudeza visual, y de los campos visuales, a los cuales no refirió el galeno, ignorándose la magnitud de la afectación o compromiso de la retina para el año 2000. Según los diagnósticos médicos estaba controlada la diabetes insulínica del actor en esa época, y aun cuando se hubiera diagnosticado afección de otros sistemas orgánicos, dentro de la Tabla 9.7 del manual único de calificación contenido en el Dcto 917 vigente en 1999 la evaluación de deficiencia por diabetes mellitus para alcanzar el 30% de deficiencia global requería que la retinopatía fuera severa, de lo cual no se allegó elemento idóneo de convicción. Era menester que el calificador valorara integralmente el conjunto de pruebas puestas a disposición del calificador, en cuyo caso, de requerir otras adicionales, debió solicitarlas. Mal podía hacer recaer la estructuración de la pérdida en ese padecimiento, y referir a las demás enfermedades que se hallaron, pero con posterioridad al año 2000, como es la nefropatía diabética cuyo diagnóstico data del año 2001, desconociéndose su severidad.

3. El dictamen emitido por la JRCI destaca entre los restantes, por la puntual valoración hecha respecto de los diagnósticos presentados por el paciente, así como su incidencia en la capacidad laboral del mismo; contiene la narración detallada de los fundamentos fácticos y el claro diagnóstico técnico científico de las enfermedades que originaron la pérdida de capacidad laboral, hallando que, si bien el trasplante renal practicado en 2010 fue exitoso a efectos de corregir la falla correspondiente, no se modificó el cuadro de diabetes complicada, que derivó en posteriores padecimientos para el hoy demandante. Es el trasplante como tal el que permite evidenciar la pérdida de capacidad laboral real del señor Cortés Hernández, con relación a los restantes diagnósticos por él presentados.

Este dictamen, da cuenta completa de la historia clínica aportada para su estudio y la valoración actualizada del paciente (de lo que carecen los emitidos por Colpensiones y la IPS Universitaria) e incluye el análisis de todas las historias clínicas y resultados de exámenes de diagnóstico presentados por el demandante cuando fue evaluado en cada oportunidad, debiendo tenerse como fecha de estructuración para efectos de continuar el análisis jurídico propuesto, el 17 de mayo de 2010.

b) Aplicación del Principio de Condición más Beneficiosa

En el caso concreto, siendo discutido el reconocimiento de una pensión de invalidez, debe entenderse que, por regla general, tal prestación se regula por la norma que esté vigente en la fecha de estructuración de la PCL, es decir, el literal a) del art. 1 de la Ley 860 de 2003, que exige para la causación de la prestación, además de una PCL igual o superior al 50%, el haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de su estructuración, requisito no satisfecho por el demandante, quien presenta su última cotización ante el Sistema Pensional, durante el ciclo de diciembre de 1992, es decir, en momento anterior a la vigencia del actual Sistema Pensional, regulado por la Ley 100 de 1993.

Bajo estas circunstancias, es procedente analizar la aplicación del principio de condición más beneficiosa, como se solicita en la demanda. Dicho principio, se ha desarrollado, ante la ausencia de un régimen de transición, con “la única finalidad de proteger a «[...]un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta» esto es, que tuvieran una expectativa legítima”²⁷.

Para la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, el tránsito legislativo que admite la aplicación del principio, refiere estrictamente a la norma inmediatamente anterior a la que se encuentre vigente al momento de materialización del riesgo y de manera temporal, de ahí que considere aplicable, en relación con la PCL estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, aplicar los requisitos de la Ley 100 de 1993 primigenia, siempre que estos se cumplan antes del 26 de diciembre de 2006²⁸, pero ellos no fueron satisfechos por Porfirio de Jesús Cortés Hernández.

Para esa Corporación deviene improcedente acudir al principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo Ley 860 de 2003 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por considerarlo violatorio del principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; sin embargo, **la Corte Constitucional**, en ejercicio de su función como Órgano de Cierre de la Jurisdicción Constitucional, difiere de esa postura, considerando y precisando en las sentencias SU-442 de 2016 y SU -556 de 2019²⁹ que es viable aplicar el principio de condición más beneficiosa en el referido tránsito legislativo, siempre que el afiliado haya satisfecho la densidad de semanas exigida por esa norma, antes de expirar su periodo de vigencia y supere el test de procedencia definido en la sentencia SU-556 de 2019:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez ³⁰ , pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las

²⁷ Sentencia SL2544 de 2019, haciendo cita y transcripción parcial de la 38674 de 2012

²⁸ Reitera la postura previamente adoptada, en sentencia SL 3161 de 2019, haciendo mención y transcripción parcial de las sentencias SL 2358 de 2017 y SL658 de 2018

²⁹ En esta sentencia, se fija el test de procedencia de la aplicación del principio en sede de Acción de Tutela, como consecuencia de que no se había construido el mismo en la sentencia SU 446/16

³⁰ Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

	siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Esta Sala viene apartándose respetuosamente del precedente judicial construido por la H. Corte Suprema de Justicia, por considerar que el de la H. Corte Constitucional se adecúa más a los principios del Estado Social y Constitucional de Derecho, así como de los que orientan las relaciones al interior del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, máxime al negar ésta última Corporación, que la sostenibilidad financiera del Sistema se vulnere al aplicar la condición más beneficiosa en un tránsito legislativo no inmediato, en la medida en que el número de semanas que exigía el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, era incluso superior al que hoy exige la Ley 860 de 2003.

Exigía el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, vigente hasta el 31 de marzo de 1994, inclusive, “haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.

Valorada la prueba arrimada al expediente, se concluye que **el demandante satisface el de procedencia del principio de condición más beneficiosa**, así:

Test de procedencia	
Primera condición	Se acreditó que el señor Cortés Hernández, además de ser una persona en situación de invalidez, se encuentra en una situación de riesgo derivada del padecimiento de la diabetes mellitus, una enfermedad crónica y catastrófica; asimismo padece retinopatía diabética e insuficiencia renal, enfermedades degenerativas.
Segunda condición	Se infiere razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del señor Cortés Hernández, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas, pues es una persona que no percibe ingresos de ninguna actividad económica; fue conductor, pero no pudo desempeñar esa actividad, debido a su edad y condiciones de salud.
Tercera condición	Es razonable que no haya efectuado cotizaciones al Sistema Pensional para el año 2010 en que se estructura la

	PCL que ha derivado en su invalidez, pues ante la imposibilidad de trabajar formalmente, no hay lugar al pago de cotizaciones. Una de las enfermedades derivadas de la diabetes mellitus que padece es la retinopatía, que afecta la funcionalidad de su capacidad de observación, indispensable para laborar en su oficio de conductor.
Cuarta condición	Obró diligentemente al solicitar el reconocimiento de la prestación. Fue calificado por Colpensiones el 10 de diciembre de 2014, por la JRCl el 23 de julio de 2015 y por la IPS Universitaria el 04 de abril de 2016. Reclamó la prestación el 14 de septiembre de 2015 ³¹ y ante la negativa de Colpensiones, dada en resolución GNR 410817 del 17 de diciembre de 2015, notificada el 23 de diciembre del mismo año ³² , elevó nueva solicitud el 12 de abril de 2016 ³³ , radicó la demanda el 16 de mayo de 2016 ³⁴ y obtuvo una segunda respuesta negativa por parte de Colpensiones el 24 de mayo del mismo año, cuando fue notificado de la resolución GNR 139291 del 11de mayo de 2016 ³⁵ .

b) Causación y disfrute de la pensión de invalidez

Acreditado en el proceso que Porfirio de Jesús Cortés Hernández cotizó **331.43 semanas en total, entre el 18 de julio de 1978 y el 24 de diciembre de 1992**³⁶, y estructurada el 17 de mayo de 2010 una pérdida de capacidad laboral superior al 50% conforme al principio de condición más beneficiosa, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez deprecada, debiendo **REVOCARSE** la sentencia venida en apelación.

El disfrute de la prestación se causó desde el día siguiente a la fecha de estructuración de la PCL misma, pues no obra prueba de que se emitieran incapacidades al demandante en momento previo dado que para esa época llevaba cerca de ocho (8) años sin sufragar cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

La prestación será reconocida en cuantía equivalente a la pensión mínima para cada año, pues de la historia laboral del demandante se desprende que sus cotizaciones se efectuaron sobre un ingreso base de cotización que no superaba el salario mínimo para cada oportunidad. Se pagarán catorce (14) mesadas por año, por haberse causado la prestación con antelación al 31 de julio de 2011 y ser inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (3 smlv)³⁷.

Dado que la PCL se estructuró el 17 de mayo de 2010, reclamó la prestación por primera vez el 14 de septiembre de 2015 y radicó demanda el 16 de mayo de 2016, al tenor de lo dispuesto en lo dispuesto los arts. 151 del CPTSS y el 488 del CST, han prescrito las mesadas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de 2012.

³¹ Fl.94

³² Fl.93

³³ Fls.97/100

³⁴ Fl.10

³⁵ Fls.131/135

³⁶ Fls.102/103, 137/138

³⁷ Acto Legislativo 01 de 2005. Art.1 Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año

Colpensiones reconocerá y pagará al hoy demandante la suma de ochenta y siete millones ochocientos veinticinco mil trescientos treinta pesos (\$87.825.330) por concepto de retroactivo de mesadas de pensión de invalidez, causado entre el 14 de septiembre de 2012 y el 31 de mayo de 2021, detallado como aparece a continuación:

año	Vr. mesada	Nº mesadas	Total año
2012	\$ 566.700	4,56	\$ 2.584.152
2013	\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
2014	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
2015	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	5	\$ 4.542.630
			\$ 87.825.330

La mesada pensional para el año 2021 se continuará pagando en novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos (\$908.526).

De este retroactivo pensional liquidado y el que se cause posteriormente hasta el momento de pago de lo adeudado, se autorizará a la demandada que descuente el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y a lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia³⁸.

En este sentido será **revocada** la sentencia en materia de apelación.

d) Intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993

El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

El Art. 19 del Decreto 656 de 1994³⁹ autorizó al Gobierno para establecer los plazos de reconocimiento de las Pensiones, sin que, en ningún caso exceda de cuatro meses⁴⁰. La Corte Constitucional en la sentencia SU-975 de 2003 sentó que debe aplicarse la regla mencionada y como no se dispuso legalmente un plazo diferente para satisfacer

³⁸ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

³⁹ Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-376-95 del 24 de agosto de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Jorge Arango Mejía.

⁴⁰ En este sentido se legisló para la pensión de vejez en el Artículo 9 Parágrafo 1o. Inciso Final de la Ley 797 de 2003.

esta prestación, por analogía (art 145 del CPTSS), debe entenderse que, en materia de pensión de invalidez, el plazo para su reconocimiento es de cuatro meses contados desde que se eleve la reclamación administrativa, tal y como lo interpreta la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, acogida por esta corporación de segunda instancia⁴¹.

En torno a dicho aspecto se resalta que: (i) la negativa de Colpensiones al reconocimiento de la prestación no fue arbitraria, por fundamentarse en parámetros legales vigentes en la época de reclamación del señor Cortés Hernández. (ii) La condena al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, se impondrá en atención a la aplicación del principio de condición más beneficiosa, previa aplicación de otro concepto de naturaleza jurisprudencial, por tanto, no procede condenarla al pago de intereses moratorios⁴².

Sin embargo, para garantizar que el demandante perciba lo adeudado en su real valor, por ende, se ordenará indexar la condena; para ello, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, puesto que son prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada reajuste a indexar.

e) Indemnización de perjuicios a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia

No se accederá a esta pretensión de la demanda, pues tal y como advirtió el A-quo, no se expresó en los hechos de la demanda, en que consistieron los perjuicios que la parte demandante pretendió respecto de la referida Junta, y no estando acreditados mal puede declararse su existencia, ni acceder a su tasación.

Menos aún, por cuanto, el dictamen emitido por esta entidad fue el que se tuvo en cuenta para determinar la fecha de estructuración de la PCL del demandante, no habiendo lugar a interpretar yerro, ni perjuicio alguno.

En ese punto se **confirmará** la sentencia apelada.

⁴¹ Ver entre otras, la sentencias SL14269 de 2014, SL 2150 de 2017 y SL 1562 de 2019

⁴² Ver sentencia SL

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la demandada han quedado implícitamente resueltas. La excepción de prescripción prosperó parcialmente como se indicó por haber transcurrido los tres años establecidos en los arts.488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. COSTAS

Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones por haber resultado vencida en el proceso, al salir avante el recurso de apelación formulado por la parte demandante. Con fundamento en el parágrafo del artículo 2.1.1. Capítulo II del Decreto 1887 de 2003 se fija como agencias en derecho en esta instancia, el equivalente a 6 SMLMV en 2021.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 06 de octubre de 2017 por el Juzgado veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por Porfirio de Jesús Cortes Hernández contra Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia.

SEGUNDO: Declarar que Porfirio de Jesús Cortes Hernández, tiene derecho a que Colpensiones le reconozca y pague pensión de invalidez de origen común, causada el 17 de mayo de 2010, en cuantía equivalente a la pensión mínima legal que parada cada año fije el gobierno. Se pagarán catorce (14) mesadas al año.

TERCERO: Ordenar a Colpensiones pagar al demandante, la suma de ochenta y siete millones ochocientos veinticinco mil trescientos treinta pesos (\$87.825.330) por concepto de retroactivo de mesadas de pensión de invalidez, causado entre el 14 de septiembre de 2012 y el 31 de mayo de 2021. Esta suma será indexada al momento del pago, como se indicó en la parte motiva de la providencia.

La mesada pensional para el año 2021 se continuará pagando en novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos (\$908.526).

De este retroactivo pensional y el que se cause a la fecha del pago de esta sentencia, se autoriza a la demandada que descuente el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud.

CUARTO: Confirmar la referida sentencia en cuanto absolvió a la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia de la pretensión de pago de indemnización de perjuicios.

QUNTO: Declarar parcialmente próspera la excepción de prescripción. Prescribieron las mesadas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de 2012.

SEXTO: Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones. Se tasan las agencias en derecho en esta instancia, en la suma equivalente a 6SMLMV en 2021.

Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que la anterior sentencia fue notificada por ESTADOS N° 102 fijados hoy 15 de junio de 2021 a las 8:00AM

El secretario